

## **PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY QUE PROTEGE LA FUENTE LABORAL**

**(Preparado a solicitud de la Senadora Yasna Provoste Campillay)**

Dando cumplimiento a lo solicitado y con el fin de tener la base de discusión para un proyecto que busque la protección del empleo y los ingresos de los trabajadores que pudieren ser afectados por la declaración de Alerta Sanitaria, vengo en proponer lo siguiente:

**PROYECTO DE LEY QUE PROTEGE LA FUENTE LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, DURANTE LA ALERTA SANITARIA DECLARADA POR EL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE EL DECRETO N° 4 DE 5 DE FEBRERO DE 2020.**

### **Exposición de motivos.**

1. El artículo 1 de la Constitución Política de la República estatuye que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.
2. A su vez, en su artículo 19 la Constitución asegura a todas las personas, en su número 1° el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; en el 9° el derecho a la protección de la salud; en el 16° el de derecho a la libre elección del trabajo a una justa remuneración; en el 18° el derecho a la seguridad social y en el 26° el derecho a la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán

afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

3. Ante la situación de crisis sanitaria universal, y después de que la Organización Mundial de la Salud calificara el Covid 19 como pandemia, resulta esencial que los derechos humanos sean protegidos, desde el inicio, destinando todos los esfuerzos y acciones de prevención, preparación, contención y tratamiento a fin de proteger la salud pública, dando apoyo prioritario a personas en mayor riesgo y en condiciones laborales más desmejoradas e inciertas.
4. Si bien el Estado puede imponer algunas restricciones a los derechos humanos, en el contexto de la pandemia de Covid-19 y la declaración de alarma sanitaria, las medidas que se adopten deben ser coherentes con el respeto a los derechos humanos, en este caso, a la salud, a la estabilidad en el empleo y a asegurar una remuneración o subsidio que permita vivir dignamente.
5. Teniendo conciencia de la situación excepcional que vive el mundo a la que, obviamente, Chile no escapa, deben adoptarse medidas que tiendan a garantizar que todas las personas accedan a la seguridad social, haciendo que las personas con trabajos precarios no se vean afectadas de manera desproporcionada. Lo mismo hay que ocuparse de los trabajadores y las trabajadoras migrantes -en situación administrativa regular o irregular- las personas sujetas a condiciones de trabajo poco seguras o empleadas en el sector informal.
6. De conformidad, pues, con los tratados internacionales, la doctrina y la jurisprudencia, la Seguridad Social en Chile que, como derecho humano fundamental, comprende el conjunto de leyes, políticas, y medidas de protección social, cuya finalidad es la justicia social en una diversidad creciente

de materias relacionadas con el régimen de pensiones, la salud, las enfermedades, la maternidad, los riesgos del trabajo y la seguridad laboral, la cesantía y, en general, toda clase de prestaciones sociales, laborales y familiares que la sociedad deba atender producto de circunstancias imprevistas o extraordinarias. Entre está últimas, el Estado no puede, dada la alerta sanitaria declarada para todo el territorio nacional, dejar de proteger, por una parte, la estabilidad en el empleo otorgando trabajadores y trabajadoras un fuero laboral transitorio que prohíba su despido sin autorización judicial y, por la otra, asegurar a quienes no estén -o dejen de estar- prestando servicios efectivos, porque sus empleadores han debido cerrar los establecimientos y lugares de trabajo a causa de las posibilidades de contagio del “Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV)” que motivó la declaración de aquella Alerta Sanitaria, haciéndoles acreedores del subsidio por enfermedad de parte del organismo de salud al que estén afiliados o afiliadas.

En virtud de las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente

## **PROYECTO DE LEY**

**Artículo Primero.** Agréguese el siguiente artículo 23 transitorio al Código del Trabajo:

**Artículo 23.** Se presumirá de derecho que los trabajadores y las trabajadoras regidos por este Código gozarán del fuero laboral establecido en el artículo 174 permanente, durante la vigencia de la Alerta Sanitaria declarada para todo el territorio de la República, con el fin de enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del “Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV)”, esto es, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 4 del Ministerio de Salud de 5 de febrero de 2020.

Atendiendo a la Alerta Sanitaria referida en el inciso precedente, los trabajadores y las trabajadoras que no estén prestando servicios efectivos, porque sus empleadores han debido cerrar los establecimientos y lugares de trabajo a causa de las posibilidades de contagio del “Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV)” que motivó la declaración de aquella Alerta Sanitaria, percibirán el subsidio por enfermedad de parte del organismo de salud al que estén afiliados o afiliadas.

A efectos del artículo 7 de la ley 16.744, tratándose de trabajadores y trabajadoras que deban paralizar la prestación de sus servicios por acto de autoridad o por decisión propia adoptada en virtud del artículo 184 bis de este Código, o por decisión del empleador, fundados todos ellos en la necesidad de prevenir la extensión del contagio del “Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV)”, se entenderán afectados de incapacidad laboral de origen profesional y tendrán derecho a las prestaciones de la ley 16.744.

La suspensión de faenas en ningún caso implicará el cese del pago de remuneraciones. Se entenderá cumplida esta obligación cuando ocurra el pago de subsidios por incapacidad laboral o de subsidios o bonos que pueda disponer extraordinariamente la ley como sustitutos de la remuneración.

Transcurrido el plazo de vigencia del fuero laboral, los organismos de salud respectivos podrán compensar con los correspondientes empleadores, los subsidios que hubiesen pagado injustificadamente, o bien, podrán pedir, derechamente, el reintegro a los trabajadores en los casos que corresponda.

**Artículo Segundo:** Agréguese el siguiente artículo 20 transitorio al DFL N° 29 de 16 de junio de 2004 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo:

**Artículo 20.-** Los funcionarios públicos, así como los trabajadores y las trabajadoras -cualquiera que sea el estatuto jurídico que rija su relación contractual- que presten servicios a la Administración del Estado, esto es, en los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de

Orden y Seguridad Pública, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley, no podrán ser despedidos ni exonerados de sus funciones y labores para los que fueron contratados, durante la vigencia de la Alerta Sanitaria declarada para todo el territorio de la República, con el fin de enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del “Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV)”, esto es, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 4 del Ministerio de Salud de 5 de febrero de 2020.

**NOTA: En caso de aprobarse el artículo 23 transitorio del Código del Trabajo, habría que agregar, después de la expresión “relación contractual”, la siguiente frase: “excluidos solamente aquellos que la rige el Código del Trabajo-”**

## **NORMAS REFERIDAS Y CITADAS**

### **Código del Trabajo**

**Art. 174.** En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160.

El juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, podrá decretar, en forma excepcional y fundadamente, la separación provisional del trabajador de sus labores, con o sin derecho a remuneración. Si el tribunal no diere autorización para poner término al contrato de trabajo, ordenará la inmediata reincorporación del que hubiere sido suspendido de sus funciones. Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios, debidamente reajustados y con el interés señalado en el artículo precedente, correspondientes al período de suspensión, si la separación se hubiese decretado sin derecho a remuneración. El período de separación se entenderá efectivamente trabajado para todos los efectos legales y contractuales.

---

---

**Decreto N° 4 del Ministerio de Salud de 5 de febrero de 2020:**

**Artículo 10º.-** Los efectos de este decreto tendrán vigencia durante un año, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado si las condiciones sanitarias así lo permiten o de prorrogarlo en caso de que estas no mejoren.

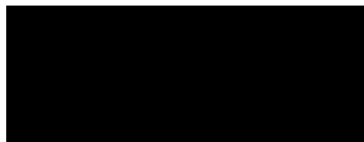
---

**Artículo 7 de la Ley 16.744 establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales**

Artículo 7º. Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.

Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud.



Luis Eduardo Thayer Morel  
Abogado

**MINUTA CON IDEAS O PILARES PARA UN PLAN DE EMERGENCIA**  
**ORIENTADO A ENFRENTAR CRISIS POR COVID-19**

**(Propuesta a Senadora Yasna Provoste Campillay)**

De acuerdo a lo solicitado, formulo la siguiente minuta de trabajo a fin de concebir un plan de emergencia destinado a enfrentar el COVID-19.

**“PLAN MAESTRO PARA LA EMERGENCIA”.**

El Estado debe mostrar su poder y eficiencia para enfrentar la emergencia, no sólo con instructivos diarios, toques de queda, ni permisos para salir en tiempo de cuarentena.

Un plan Maestro de contener varios pilares sobre los cuales se sostendrán las acciones y medidas efectivas del Estado en distintos ámbitos. Y su objetivo es que tanto las autoridades regionales, municipales y locales, como asimismo toda la población, tenga -o vaya entendiendo- la orientación de cómo asumir las libertades, los derechos, las restricciones y las obligaciones que surjan de las medidas que se vayan adoptando, según el desarrollo de la crisis sanitaria. Ello es indispensable, porque las condiciones de las regiones, de las ciudades, de las comunidades y de las poblaciones -y, también, de las personas que habitan en ellas- no son las mismas. El conocimiento de lo que enfrentamos y de los caminos a transitar por los habitantes de Chile, es esencial, su actuar adecuado, más colaborativo y menos temeroso, dependerá mucho más de la comprensión de las medidas y acciones que se adopten por la Autoridad que de las instrucciones que día a día Ella dicté, sin que, muchas veces, las personas no entiendan el sentido que tienen. A modo ejemplar, un Plan Maestro debe, a lo menos, contar con Pilares que entreguen las directrices que guiarán la acción del Estado y orientarán a chilenos y chilenas sobre el desconocido e incierto desarrollo de la Alerta Sanitaria declarada. Desde ya, los siguientes pilares orientadores:

- 1) **Salud y remedios por causa de pandemia gratuita:** Uso de todos los recursos públicos y privados disponibles para atención de la pandemia; Levantamiento oportuno de hospitales de campaña por FFAA; Capacitación de personal de salud para enfrentar atenciones de pandemia; etc, No olvidar que el Estado de catástrofe autoriza al Presidente, de acuerdo al artículo 43, inciso tercero de la CPE, para **disponer requisiciones de bienes; Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y, Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada**, las que puede delegar en el militar a cargo de cada zona, sin perjuicio de las facultades con que este cuenta <sup>1</sup>.
- 2) Crear un **Fondo de Contingencia** con aporte de Reservas, reasignaciones presupuestarias y endeudamiento de ser necesario, con el objeto de cubrir, en mayor medida posible, las siguientes prestaciones:
  - a. Reforzar, en coordinación con municipios y juntas de vecino, los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el

---

<sup>1</sup> Una vez declarado el "Estado de Catástrofe", las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República, conforme con el inciso final del artículo 41 de la Constitución. Además, el inciso tercero del artículo 43 del texto constitucional establece que el Presidente puede: Restringir las libertades de locomoción y de reunión; Disponer requisiciones de bienes; Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y, Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional establece en su artículo 6° que tales facultades pueden ser delegadas total o parcialmente por el Presidente de la República, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe. Además, el artículo 7°, le entrega al jefe de la Defensa Nacional designado los siguientes deberes y atribuciones:

Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona;

Controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella; Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros;

Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes; Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada; Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública; Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población; y, Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona



apoyo, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. De este modo, enfrentar, cuando sea posible, el cierre de comedores, de centros sociales, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria. Los centros cerrados podrán ocuparse de lugares de acopio o de entrega ordenada de insumos de salud, agua potable, abrigo y alimentación.

- b. Implementar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera posibiliten contactos de verificación y de vigilancia de la población beneficiaria de servicios e insumos.
  - c. Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario y posible, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, de higiene, y otros, considerando la suspensión de atención diurna en centros.
  - d. Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en intensidad, de los mismos. Posibilidad de coordinar con Fundaciones y Corporaciones afines, Cruz Roja, Bomberos, etc.
  - e. Adquisición de medios de prevención.
- 3) **Crear otro Fondo Social Extraordinario** para atender necesidades socio-económicas, con aportes del Tesoro, reasignaciones, endeudamiento si es

necesario y cotización de grandes empresas, Bancos para hacerse cargo de las consecuencias sociales del Covid 19:

- a) Fortalecimiento presupuestario de los municipios en tareas de concreción de medidas por su cercanía con la gente y conexión con Juntas de vecinos, entrega de "canastas de vida" con alimentos, abrigo, artículos de limpieza y prevención como mascarillas y alcohol," a personas independientes y/o sin ingresos; (Facultades del Militar jefe de zona: *"Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes"* y *"Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada"*)
- b) Ampliar cobertura de servicios básicos en sectores más vulnerables: agua, electricidad, gas, telecomunicaciones.
- c) Mantener, fortalecer y habilitar canales de distribución, además de los habituales, otros como los de JUNAEB y de los militares...
- d) Activación de programas de apoyo y asistencia técnica del teletrabajo y trabajo a distancia.
- e) Impulsar Programas de ayudas y créditos blandos a las microempresas y PYMES a través del apoyo de SERCOTEC, INDAP, ENAMI, CORFO, BANCO DEL ESTADO, etc., fortaleciendo la capacidad de otorgar financiamiento de estas entidades y dándoles flexibilidad para contratar créditos de largo plazo y para la reasignación de los recursos que dispongan...

- f) Otorgamiento de subsidios que permitan sobrevivencia tranquila de las familias en sus casas para las situaciones que no tengan derecho a subsidios legales por incapacidad común o incapacidad laboral.

Para el o los periodos de cuarentena obliga o cierres de empresas por actos de autoridad motivados en el control de la pandemia, LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL debe ser cubierta con subsidios de incapacidad por enfermedad a través FONASA o ISAPRES, según sea la afiliación del trabajador(a), cuando la motivación de la declaración de cuarentena en determinadas zonas o comunas; y cubierta con subsidios de los Órganos Administradores del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, cuando se trate del cierre de empresas por actos de autoridad.<sup>2</sup>

Preferentemente por una ley, aunque las Superintendencias de Seguridad Social y de Servicios de Salud podrían tener la capacidad o facultades de hacerlo, debe establecerse dos presunciones mientras rija el Estado de Alerta Sanitaria:

- Como medida de salud preventiva, se presumirán como sospechosos de contagio del COVID 19, o en riesgo serio de adquirirlo, todos los trabajadores, afectados por la declaración de cuarentena en las zonas o comunas que habiten, teniendo derecho a percibir el subsidio por

---

<sup>2</sup> En España el art. 5 del Real Decreto Ley 6/2020, resolvió el tema, de la siguiente manera:

«1. **Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.**

2. *En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.*

3. *Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.*

4. *La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»*

enfermedad, mientras dure dicha medida, siendo de cargo de la respectiva institución de salud. No se aplicará el subsidio en caso de pacto de mantención de remuneración o de trabajo a distancia o teletrabajo.

- Como medida de salud preventiva, se presumirán como sospechosos de contagio del COVID 19, o en riesgo serio de adquirirlo, todos los trabajadores, afectados por el cierre de su empresa o centro de trabajo por causa de la pandemia, teniendo derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral, mientras dure dicha medida, siendo de cargo del respectivo Órgano Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. No se aplicará el subsidio en caso de pacto de mantención de remuneración o de trabajo a distancia o teletrabajo.
- El empleador podrá hacer uso, por una vez, del derecho establecido en el artículo 76 del Código del Trabajo (vacaciones colectivas) en la eventualidad de existir riesgo de pandemia. En este caso, deberá contarse con el acuerdo del o de los sindicatos. Si no hubiere sindicatos deberá contar con la aprobación de la mayoría de los trabajadores.
- El uso del AFC con el fin de pagar subsidios de cesantía, en lugar de los subsidios indicados en las letras a) y b), es un error grave, porque se echa mano a recursos destinados, claramente a cesantía, situación ésta que puede producirse en futuro próximo como consecuencia de la crisis económica que va en paralelo.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> **Comentario LET:** Me parece que, sin perjuicio de que los subsidios se terminarán pagando con cargo al AFC y así se terminará aprobando, **es necesario hacer presente para la historia que viene que el sentido común y que por razones de Estado protector, la forma de resolver los ingresos de los trabajadores con relación laboral suspendida por pandemia, deben asumirse como lo resolvió España (ver más abajo). Y dejar los fondos de cesantía para quienes vayan quedando cesantes. No desnaturalicemos las instituciones: la protección de la salud no se protege con fondos para la cesantía, por el sólo hecho de que “allí haya plata”. También hay en los fondos soberanos.**

- Es indispensable el pago de subsidios a trabajadores, en los términos indicados porque los motivos los justifican: es obvio que si al trabajador se le manda para la casa para prevenir q adquiera el COVID 19 y evitar que siga creciendo la pandemia, debe pagársele el subsidio laboral, porque se está previniendo que, en la empresa, valga la redundancia, se prevenga la expansión del virus.
- El no pago de los subsidios señalados, lo mismo que la desatención de los independientes (1/3 de los activos) nos hará ver en no más de 20 días., o sea en plena pandemia, el comienzo de los saqueos de alimentos, en supermercados, los asaltos a cajeros o a quienes estén sacando plata, sin importarle a los hechores desafiar hasta el toque de queda... El instinto de sobrevivencia solo es comparable a la fiereza de una madre defendiendo a su hijo...

4) **Postergación de pago deudas hipotecarias por compra de primera vivienda y de tarjetas de crédito bancarias y de casa comerciales. Asimismo, la postergación del pago los de servicios básicos.**

Atendiendo a los niveles generales de endeudamiento de los trabajadores, aquellos que enfrenten la suspensión de los contratos de trabajo o la cesantía -como dependiente o independiente- por causa de la pandemia de Covis-19, aunque estén percibiendo subsidios por una u otra causa, tendrán derecho a:

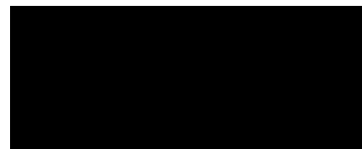
- a. Solicitar a la entidad acreedora de préstamos hipotecarios otorgados para la compra de su primera vivienda, o acreedoras de tarjetas de crédito bancario o de casas comerciales una postergación de las cuotas o dividendos mensuales hasta por el término de 6 meses. Para tal efecto, deberá acreditar su situación su situación con un certificado de la entidad previsional que lo esté subsidiando, por cualquiera de esas dos causas. Los independientes lo acreditarán con las

declaraciones de IVA o Boletas de servicios electrónicas emitidas, durante los 6 meses precedentes a la solicitud.

- b. La entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días. Una vez concedida la postergación por el plazo de 6 meses -o un término mayor si así lo acordaren las partes- la entidad acreedora comunicará al Banco Central y al Servicio de Impuestos Internos la existencia de la postergación y su duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo.
- c. En las mismas condiciones señaladas en las letras a. y b. precedentes, podrán postergar, mes a mes, mientras dure la Alerta Sanitaria y mientras no cambien las condiciones de suspensión del contrato de trabajo o de cesantía, los pagos de servicios básicos de electricidad, agua, gas.

Durante el periodo de vigencia de la postergación la que se refiere el presente capítulo, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.

- 5) **Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha.** Excepcionalmente, mientras esté en vigor la Alarma Sanitaria, las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones, mantendrán disponibles al público que los tenga contratados, la prestación de tales servicios, de manera que no podrán suspenderlos o interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y seguridad de las redes, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de servicios suscritos por los consumidores.



Luis Eduardo Thayer Morel  
Abogado